



SENTENCIA DEFINITIVA

Torreón, Coahuila de Zaragoza, veinte de enero de
dos mil veinticinco.

Visto para resolver los autos en **sentencia definitiva** en
el **juicio oral mercantil** número **388/2024-B**.

RESULTANDO:

1. **Demanda.** Mediante escrito presentado el **catorce de marzo de dos mil veinticuatro**, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna, con residencia en esta ciudad; y recibido en este órgano jurisdiccional, en esa misma fecha, [REDACTED] demandó en la vía oral mercantil al **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores**, las prestaciones siguientes:

“1.- Por el pago de la cantidad de **\$80,000.00 (ochenta mil pesos 00/10 M.N.)**, que la Institución demandada debe entregarme, derivado del Contrato de Crédito número [REDACTED] de fecha 26 de abril del 2023, que bajo protesta de decir verdad manifiesto que, a la fecha no se me ha realizado el depósito correspondiente a cuenta a mi nombre.

2.- El pago de interés bancario que se genere por la cantidad arriba mencionada, desde la fecha en que no se me ha realizado el pago, hasta que concluya el juicio, de acuerdo con la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE).

3.- El pago de los Gastos y Costas que se generen con la tramitación de la presente instancia.”

2. **Trámite.** Mediante auto de **diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro**, se admitió a trámite la demanda presentada, por lo que se ordenó el **emplazamiento** de la

parte demandada, realizándose el **doce de abril de dos mil veinticuatro**.

3. Contestación a la demanda. En proveído de **treinta de abril de dos mil veinticuatro**, se recibió el escrito de contestación, de manera oportuna; con el que se dio vista a la parte actora; sin que se le tuviera desahogando la misma.

4. Audiencia preliminar. El **dieciocho de junio de dos mil veinticuatro**, tuvo verificativo la **audiencia preliminar**.

5. Audiencia de juicio. El **siete de enero de dos mil veinticinco**, se celebró la audiencia de juicio, en la que se declaró visto el asunto.

En audiencia de **veinte de enero de dos mil veinticinco**, se dictó la presente sentencia.

Dichas audiencias constan en el sistema de videograbación con que cuenta este juzgado especializado.

C O N S I D E R A N D O:

1. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para resolver la presente controversia, por disponerlo los artículos 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 59 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 75, fracción XXIV, 1049, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, fracciones I, II y III, 1390 Bis del Código de Comercio, en relación con los acuerdos generales 3/2013 y 34/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.



Ello, toda vez que resuelve respecto de una controversia del orden mercantil que solo afecta intereses particulares, cuya acción se inició optativamente ante esta potestad del fuero –u orden- federal, sin que se hubiera opuesto excepción al respecto.

2. Procedencia de la vía. Al admitirse la demanda que dio lugar al presente juicio, de manera oficiosa, se analizó la procedencia de la vía intentada, no obstante, dado que constituye un presupuesto procesal que es de orden público, de igual forma se estudia en el presente fallo.

Sirve de apoyo, la jurisprudencia 25/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Novena Época, en la página 576, con el registro 178665, de rubro: ***“PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA.”***

En ese contexto, por ser una cuestión de orden público, se procede al estudio de la **procedencia de la vía**.

Al respecto, se tiene que la **vía oral mercantil** resulta idónea para promover el presente juicio, ya que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 75, fracción XXIV y 1,049, ambos del Código de Comercio, en relación con los artículos del 291 al 301 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la controversia que aquí se ventila deriva de actos comerciales, toda vez que la pretensión planteada por parte actora, consiste en el pago de la cantidad

derivada de **un contrato de crédito** celebrado entre las partes.

La cual se encuentra contenida en el último de los ordenamientos generales en cita, en tanto que por disposición de los numerales 1055 y 1390 Bis de la citada legislación vigente en la fecha de presentación de la demanda, los juicios mercantiles son, entre otros, orales, en los que se tramitarán todas las contiendas sin limitación de cuantía y, no existe una vía especial para este tipo de juicios.

3. Precisión de la pretensión. En principio, es pertinente destacar que el documento base de la acción deriva de un **contrato de crédito**, celebrado entre las partes el **veintiséis de abril de dos mil veintitrés**.

Ahora bien, en el presente caso, la litis se constriñe en determinar si a la parte actora **Pedro Antonio Galaviz Valdez**, le asiste el derecho a demandar del **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores**, lo siguiente:

a) El pago de la cantidad de **\$80,000.00 (ochenta mil pesos moneda nacional)**, derivada del Contrato de Crédito número [REDACTED] de fecha 26 de abril del 2023.

b) El pago de interés bancario que se genere por la cantidad mencionada, desde la fecha en que no realizó el pago, hasta que concluya el juicio, de acuerdo con la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIE).

c) El pago de los Gastos y Costas que se generen con la tramitación de la presente instancia.



Para ello, se debe tomar en consideración lo dispuesto por los artículos 1194 y 1196, en relación con el diverso 1390 Bis 8, todos del Código de Comercio, que establece: **“El que afirma está obligado a probar...”**, por lo que, de conformidad con dichas disposiciones, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado los de sus excepciones y defensas.

Así, los artículos 1194 y 1196 del Código de Comercio, disponen:

“Artículo 1194. *El que afirma está obligado a probar. En consecuencia, el actor debe probar su acción, y el reo sus excepciones.”*

“Artículo 1196. *También está obligado a probar el que niega, cuando al hacerlo desconoce la presunción legal que tiene a su favor el colitigante.”*

Apoya esa consideración la tesis sin número, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, Septiembre de 1993, página 291, registro 215051, que dice:

“PRUEBA CARGA DE LA. *La carga de la prueba incumbe a quien de una afirmación pretende hacer derivar consecuencias para él favorables, ya que justo es que quien quiere obtener una ventaja, soporte la carga probatoria. En consecuencia, el actor debe justificar el hecho jurídico del que deriva su derecho. Así, la actora debe acreditar la existencia de una relación obligatoria. En el supuesto de que se justifiquen los hechos generadores del derecho que se pretende, la demandada tiene la carga de la prueba de las circunstancias que han impedido el surgimiento o la subsistencia del derecho del actor, puesto que las causas de extinción de una obligación deben probarse por el que pretende sacar ventajas de ellas.”*

Estudio de fondo del asunto.

ANDRES GARZA VALDEZ

4. Estudio de la acción. De acuerdo con los principios generales de la prueba, previstos por los artículos 1194, 1195 y 1196 del Código de Comercio, como ya se dijo, el que afirma está obligado a probar, pero también está obligado a probar el que niega cuando al hacerlo desconoce la presunción legal que tiene a su favor el colitigante; al efecto, más que una obligación debe entenderse como una carga.

Una vez establecida la litis en el negocio judicial que nos ocupa, se procede al estudio de la acción hecha valer por la parte actora, para lo cual conviene señalar que de la demanda integral en estudio se desprende que reclama la entrega del numerario correspondiente al crédito solicitado, el pago de interés bancario generado por la cantidad del crédito y los gastos y costas que se generen con motivo del presente juicio.

5. Elementos de la acción. Los elementos que integran la acción ejercida son:

- i. La existencia de una relación contractual;
- ii. La exigibilidad de la obligación contractual;
- iii. El incumplimiento de la obligación por parte del demandado.

5.1 Relación contractual. El primero de los elementos referidos, consistente en la **existencia de una relación contractual** entre las partes en el presente juicio, **se encuentra acreditado** con las documentales privadas consistentes en el contrato de crédito [REDACTED], de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, celebrado entre [REDACTED] y el **Instituto del Fondo Nacional para el**



Consumo de los Trabajadores; la Solicitud de Registro de Modificación de datos de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, y la Autorización de Crédito folio [REDACTED]

Documentales privadas que por su idoneidad y eficacia, tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 1238, 1241 y 1296, todos del Código de Comercio; es decir, surte sus efectos como si hubiera sido reconocida expresamente, al haber sido presentada en el juicio por vía de prueba y no haber sido objetada por la parte contraria.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XX. J/26, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo IV, Julio de 1996, página 304, registro 201841, de rubro y texto:

“DOCUMENTAL PRIVADA, LA FALTA DE OBJECCIÓN HACE INNECESARIO PERFECCIONARLA. Si el documento privado exhibido en juicio no es objetado por la contraria en cuanto a su contenido o firma, ninguna obligación legal tiene el oferente en perfeccionarlo.”

De ahí que quede debidamente acreditada la relación contractual entre el actor y la institución bancaria demandada.

5.2 Exigibilidad de la obligación contractual. El **segundo de los elementos** referidos, consistente en la exigibilidad de la obligación contractual, **se encuentra acreditado** como se verá a continuación.

En principio, la parte actora ofreció como pruebas de su intención las documentales privadas consistentes en el original

del contrato de crédito [REDACTED] de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, celebrado entre [REDACTED] y el **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores**; misma que ya fue valorada en el primer elemento de la acción; crédito que fue solicitado por la parte actora, en su carácter de trabajador, a la institución demandada, así como las demás documentales ofrecidas por la demandada, de las que se observa lo siguiente:

a) **Solicitud del crédito.** De las documentales allegadas por la demandada, previamente valoradas, se observa la Solicitud de Registro y/o Modificación de Datos, de **veintiséis de abril de dos mil veintitrés**, se advierte que el actor proporcionó al instituto demandado sus datos generales, de ingresos y laborales, para el efecto de continuar con la solicitud del crédito correspondiente.

b) **Monto del crédito principal.** En la **cláusula primera** del contrato base de la acción, en relación con la autorización del crédito, la cual es parte integrante del mismo, y del pagaré, se advierte que la demandad concedió al actor un crédito **\$80,000.00 (ochenta mil pesos moneda nacional)**, y una cantidad total a pagar de **\$117,327.60 (ciento diecisiete mil trescientos veintisiete pesos sesenta centavos moneda nacional)**; dentro de esa cláusula se pactó que en el referido importe quedaban comprendidos el capital, los intereses por el diferimiento en el cobro y los intereses ordinarios, impuestos, gastos, comisiones y demás accesorios que debe cubrir el cliente.

La referida cláusula primera del contrato base de la acción, en lo conducente establece:

“PRIMERA. OBJETO. APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE.
De conformidad con lo establecido en los artículos 291 y 292 de la



Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el INSTITUTO FONACOT otorga a favor de EL CLIENTE un crédito con interés que para efectos del presente CONTRATO DE CRÉDITO se denominará CRÉDITO FONACOT, el cual estará sujeto a los términos y condiciones que el INSTITUTO FONACOT autorice, basado en la información contenida en la Solicitud de Registro y/o Modificación de Datos y que debe corresponder a la proporcionada por EL CLIENTE, sin omisiones y bajo protesta de decir verdad. Como parte del importe total del CREDITO FONACOT quedan comprendidos el capital, los intereses por el diferimiento en el cobro y los intereses ordinarios, impuestos, gastos, comisiones y demás accesorios que debe cubrir EL CLIENTE con motivo del mismo. EL CRÉDITO FONACOT se otorgará en favor de EL CLIENTE en moneda nacional y hasta por el importe que el INSTITUTO FONACOT determine en cada caso. Para el caso de programas de crédito temporales, aprobados por el INSTITUTO FONACOT, quedarán comprendidos únicamente los accesorios determinados en la Autorización de Crédito.”.

De lo anterior, se evidencia que en el contrato base de la acción se estipuló que al acreditado, aquí actor, se le otorgaba un crédito por el monto que el instituto demandado autorice basado en la información contenida en la Solicitud de Registro y/o Modificación de Datos; mismo que, en el presente caso, de acuerdo a la Autorización de Crédito es de **\$80,000.00 (ochenta mil pesos moneda nacional)**, cantidad a la que se adicionaron los conceptos de comisión por apertura más Impuesto al Valor Agregado (IVA), interés por diferimiento en el cobro más Impuesto al Valor Agregado (IVA), aportación fondo, e intereses ordinarios.

Por tanto, de conformidad con la citada cláusula primera del contrato de crédito, y la Autorización de Crédito, **queda acreditado** que el instituto demandado **concedió el crédito con interés**, a la parte accionante, el cual se depositaría en los términos expuestos en el propio acuerdo de voluntades.

Aunado a lo anterior, de los recibos de nómina exhibidos por la parte actora, correspondientes a los periodos del diecinueve al veintidós de diciembre de dos mil veintitrés; del veintiocho al treinta de diciembre de dos mil veintitrés; y del treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés al dos de enero de dos mil veinticuatro se observan las deducciones realizadas al actor, en su carácter de trabajador de la moral [REDACTED], identificadas con la clave **1FO**, descripción **FONACOT**, por las cantidades de \$**977.73**, \$**977.73** y \$**822.27**, respectivamente.

Lo anterior, permite establecer que el instituto demandado se encuentra cobrando las amortizaciones del crédito autorizado al trabajador, vía descuentos realizados directamente a su nómina.

5.3 Incumplimiento de la obligación. El **tercero de los elementos** referidos, consistente en el **incumplimiento de la obligación** pactada entre las partes en el contrato de crédito base de la acción, **se encuentra acreditado** como se verá a continuación.

Respecto al elemento de la acción en estudio, consistente en que el enjuiciado hubiese **incumplido las obligaciones** que contrajo con la celebración del contrato base de la acción, la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó que era a la parte demandada a quien correspondía acreditar, dentro del juicio, el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, pues adujo que al actor no podía exigírsele la demostración de un hecho negativo, cuando la acción se fundara precisamente en un hecho de esa naturaleza (negativo); de ahí que sostuviera que **el cumplimiento de las obligaciones correspondía demostrarlo al obligado y no el incumplimiento al actor.** El



criterio en comento, se desprende de la tesis aislada (sin número), emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXXII, página 1697, registro 340607 de rubro y texto:

“CONTRATOS, INCUMPLIMIENTO DE LOS (CARGA DE LA PRUEBA). Al demandado corresponde acreditar, dentro del juicio, el cumplimiento de las obligaciones a su cargo y, por tanto, no haber dado causa de incumplimiento del contrato objeto del juicio, pues al actor no puede exigírsele la demostración de un hecho negativo, cuando en uno de esa clase se funda la acción.”

Ahora bien, en la especie, la parte actora refiere que el ahora demandado no ha cumplido con su obligación de depositarle el crédito autorizado el **veintiséis de abril de dos mil veintitrés**, lo que acredita con el estado de cuenta expedido por el **Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex**, correspondiente al periodo del **nueve de abril al ocho de mayo de dos mil veintitrés**, del que se advierte que no existe depósito a su favor por la cantidad de **\$80,000.00 (ochenta mil pesos moneda nacional)**, numerario que corresponde al capital autorizado con motivo del contrato de crédito base de la acción.

Al respecto la demandada opuso, la **excepción de falta de acción y derecho**, sobre la base de que el actor pretende desconocer la obligación que contrajo con el instituto demandado, en virtud de que no demostró fraude, mala fe o error; en virtud de que el propio actor autorizó el depósito del monto del crédito a la cuenta respectiva.

Lo anterior, bajo el argumento de que el crédito concedido a la parte actora, por la cantidad de **\$80,000.00 (ochenta mil pesos moneda nacional)**; correspondiente al capital autorizado, fue solicitado y autorizado por el propio actor mediante las firmas autógrafas plasmadas la Solicitud de Registro y/o Modificación de Datos, el pagaré folio [REDACTED] la autorización del crédito y el contrato de crédito [REDACTED]

Además, que dicho numerario fue depositado en la cuenta clabe [REDACTED], del **Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex**, ya que la misma consta en la hoja de autorización del crédito, la cual fue revisada y firmada por el propio actor.

Resulta **infundada** la excepción opuesta por la demandada, por las consideraciones que enseguida se exponen.

En primer término, como quedó demostrado en el primer elemento de la acción, el actor y el instituto demandado celebraron el contrato de crédito [REDACTED], de veintiséis de abril de dos mil veintitrés; por tanto ambas partes se encuentran obligadas en los términos ahí señalados.

Además, que acorde a la cláusula primera del citado contrato, previamente transcrita, el instituto demandado otorga al actor un crédito por el monto que aquél autorice, basado en la información contenida en la Solicitud de Registro y/o Modificación de Datos; mismo que, en el presente caso, de acuerdo a la Autorización de Crédito es de **\$80,000.00 (ochenta mil pesos moneda nacional)**.

En ese sentido, la cláusula segunda del contrato de crédito establece lo siguiente:



“SEGUNDA. MEDIOS DE DISPOSICIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL CRÉDITO. Una vez que se haya aprobado el crédito de EL CLIENTE; este podrá disponer del CRÉDITO FONACOT de las siguientes formas:

a) Mediante transferencia o depósito en cuenta bancaria a nombre de EL CLIENTE.

b) Las demás que en su momento determine el INSTITUTO FONACOT.

En el caso de que EL CLIENTE opte por que el medio de disposición sea mediante transferencia electrónica o depósito en cuenta bancaria, manifiesta su consentimiento para que el monto del CRÉDITO FONACOT autorizado sea depositado en la cuenta bancaria que EL CLIENTE señale, siempre que se encuentre a su nombre.

...”

[El énfasis es de este tribunal].

De la cláusula parcialmente transcrita, se observa que una vez autorizado el crédito, lo que en la especie aconteció, el cliente (aquí actor), puede disponer del crédito mediante transferencia electrónica o de las demás formas que en su momento determine el instituto demandado; siendo la primer opción la seleccionada por el cliente para la disposición del numerario.

Además, de la transcripción anterior se advierte que cuando el cliente opte por que el medio de disposición del crédito sea mediante transferencia electrónica o depósito a cuenta bancaria, autoriza que el numerario **sea depositado en la cuenta bancaria señalada por el cliente, siempre y cuando esté a su nombre.**

Situación que torna inverosímil el hecho de que el actor haya proporcionado un número de cuenta clabe de una tercera persona para recibir el depósito.

En primer lugar, porque los estados de cuenta son documentos personales emitidos por las instituciones bancarias **a los titulares de una o más cuentas**, en los que se contiene información sensible como saldos de dinero, consumos, transferencias, pagos recibidos, retiros, uso y pagos de créditos, entre otros; situación por la cual, los mismos son expedidos única y exclusivamente a los titulares de las cuentas; por lo que resulta inviable que el actor exhibiera un estado de cuenta de otra persona.

Ahora bien, en el extremo de que así hubiera acontecido, lo que en la especie no acreditó la demandada, correspondía al **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores**, cerciorarse de que la cuenta en la cual se efectuaría el depósito del crédito, se encontrara a nombre del cliente [REDACTED]; pues así lo establece la cláusula segunda del contrato de crédito celebrado entre las partes.

Ahora bien, respecto de la prueba confesional a cargo de la parte actora, en el desahogo de la misma, debidamente valorada, en términos de lo dispuesto por el artículo 1287, en relación con el 1390 bis 8, ambos del Código de Comercio, se advierte que no es eficaz para demostrar que fue la parte actora fue quien proporcionó el estado de cuenta de una persona distinta, en el que se aprecia la cuenta clabe [REDACTED] del **Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex**; puesto que del análisis de las respuestas que emitió no se desprende alguna relacionada con la vinculación de la actora de manera directa dicha cuestión.

Confesional a la que se le concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 1211 y 1287 del



Código de Comercio;¹ así como, de la **tesis aislada** consultable en el Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Época, Tomo LXXVIII, Pág. 3075, **de la otrora Tercera Sala** de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, **registro 350681**, de rubro y texto:

“CONFESIÓN EN LOS JUICIOS MERCANTILES. *Conforme al artículo 1212 del Código de Comercio, es judicial la confesión que se hace ante Juez competente, ya al contestar la demanda, ya al absolver posiciones; y según el artículo 1235 del mismo código, cuando la confesión no se haga al absolver posiciones sino al contestar la demanda o en cualquier otro acto del juicio, no siendo en la presencia judicial, para ser perfecta, necesita de ratificación. De acuerdo con estos preceptos, debe decirse que si la confesión respecto a la existencia de un documento, fue hecha por el demandado durante la celebración de la audiencia respectiva, al contestar la demanda y en la presencia judicial, esa confesión resulta perfecta y plenamente probatoria, conforme al artículo 1287 del código citado; por lo que es inútil, en tales circunstancias una diligencia especial de reconocimiento del documento, en los términos de los artículos 1241 a 1245 del mismo ordenamiento, puesto que la confesión de que se trata, la viene a sustituir eficazmente.”*

Ahora bien, respecto a las testimoniales ofrecidas por la parte actora a cargo de [REDACTED] y [REDACTED], debidamente valoradas conforme a los artículos 1302 y 1390 bis 43, del Código de Comercio, sirven para comprobar el depósito del crédito solicitado a una tercera persona; sin embargo, la misma no acredita que el error en el que incurrió el instituto demandado al transferir los recursos del crédito otorgado a una cuenta Clabe distinta a la del actor, sea atribuible a éste último, pues no existe narrativa en ese sentido.

¹ Art. 1211. La confesión puede ser judicial o extrajudicial.

Art. 1287. La confesión judicial hace prueba plena cuando concurren en ella las circunstancias siguientes:
I. Que sea hecha por persona capaz de obligarse;
II. Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia;
III. Que sea de hecho propio y concerniente al negocio;
IV. Que se haya hecho conforme a las prescripciones del capítulo XIII.

Además, de que la parte demandada no acreditó con prueba idónea que la el actor fue quien exhibió una estado de cuenta del cual no es titular; situación, que de haber sido así, tampoco pudo ser aceptado por el instituto demandado, pues incumple con lo establecido en la cláusula segundo del contrato de crédito previamente analizado.

En las relatadas circunstancias es evidente que la parte demandada es la que tiene la obligación de demostrar la **carga probatoria del incumplimiento del contrato en el sentido de que debió proporcionar un número de cuenta clabe a su nombre a efecto de que se le realizara el depósito del crédito autorizado.**

Ahora bien, en el presente asunto la parte demandada **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores**, con los medios de prueba ofrecidos no acreditó que fuera el cliente quien proporcionara un estado de cuenta con clabe interbancaria perteneciente a una persona tercera extraña, por lo que se concluye que dicho incumplimiento del contrato se llevó a cabo por la demandada al no haber realizado el depósito del numerario autorizado en una cuenta a nombre del cliente, como lo establece la cláusula segunda del contrato de crédito celebrado entre las partes.

En mérito de lo expuesto, toda vez que, como ya se dijo, correspondía a la parte demandada probar que efectuó el depósito del crédito autorizado en una cuenta proporcionada por el cliente y, que además debía estar a su nombre, a efecto de que demostrara la improcedencia de la acción intentada en su contra.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.2o.28 K, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su



Gaceta, Novena Época, tomo III, marzo de 1996, página 982, con número de registro 203017, establecida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito del epígrafe y texto siguientes:

“PAGO O CUMPLIMIENTO, CARGA DE LA PRUEBA. El pago o cumplimiento de las obligaciones corresponde demostrarlo al obligado y no el incumplimiento al actor.”.

Así, a la parte demandada correspondía acreditar dentro del juicio, el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, pues a la actora no puede exigirse la demostración de un hecho negativo, cuando la acción se funda precisamente en un hecho de esa naturaleza; de ahí que el cumplimiento de las obligaciones correspondía demostrarlo al obligado y no el incumplimiento a la parte actora.

En tal virtud, **se encuentre acreditado el tercer elemento de la acción** al haber incumplido la parte demandada con los pagos a que se obligó.

Conclusión. Expuesto lo anterior y toda vez que en la especie quedaron acreditados los elementos de la acción ejercitada por la parte actora, se declara procedente la prestación principal reclamada en el presente juicio oral mercantil promovido por [REDACTED] en contra de **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.**

Atento a lo anterior, resulta procedente condenar a la parte demandada al depósito de la cantidad de **\$80,000.00 (ochenta mil pesos moneda nacional)**, por concepto de capital autorizado por la propia demandada con motivo

contrato de crédito [REDACTED] de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, celebrado entre las partes.

En el entendido que dicho depósito bancario o transferencia electrónica, deberá realizarse a la cuenta clabe que el actor proporcione para dicho fin, **siempre y cuando la misma se encuentre a nombre del actor, y sea debidamente corroborada por la parte demandada.**

Lo anterior, en el entendido que, como ya se dijo, dicha cantidad corresponde al crédito concedido a la parte actora por el instituto demandado; por lo que subsisten las obligaciones contraídas por ambas partes en el contrato de crédito [REDACTED] así como las que constriñen al actor de acuerdo con el pagaré folio [REDACTED] la autorización del crédito [REDACTED].

Por lo que, el **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores**, deberá respetar las amortizaciones pagadas por el actor a través de los descuentos realizados en sus recibos de nómina.

6. Pago de interés bancario. En principio cabe precisar que, en la demanda que dio lugar al presente asunto, en el capítulo de prestaciones la parte actora reclama en el punto 2.- el pago del **interés bancario que se genere, desde la fecha en que no se le ha realizado el pago, hasta que concluya el juicio, de acuerdo con la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE).**

En ese sentido, debe destacarse que conforme al artículo 1390 bis 11 del Código de Comercio, en la demanda se expresarán los hechos en que el actor funde su petición, narrándolos sucintamente, con claridad y precisión, lo cual tiene



como propósito de que el demandado pueda producir su contestación y defensa.

En efecto, es importante la narración de los hechos en que el demandante funda su acción en juicio, puesto que ejercer la acción sin fundarla en verdaderos hechos que consten en el texto de la demanda, hace improcedente la acción, ya que bajo ninguna circunstancia podrán ser introducidas a la litis las prestaciones que no tengan precisados sus antecedentes, dado que acarrearían la indefensión de la parte demandada, al que la Ley sólo le concede una oportunidad procesal para impugnar los hechos y oponerse haciendo valer excepciones en su escrito de contestación; lo anterior de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1194 y 1326 del Código de Comercio.

Sustenta lo anterior, la jurisprudencia, 1a./J. 63/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Marzo de dos mil cuatro, en la página once, cuyo rubro y texto indican:

“DEMANDA. LA OBLIGACIÓN DE EXPRESAR LOS HECHOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN, SE CUMPLE CUANDO EL ACTOR HACE REMISIÓN EXPRESA Y DETALLADA A SITUACIONES, DATOS O A LOS CONTENIDOS EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS A ELLA (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE SONORA Y PUEBLA). Si bien es cierto que los artículos 227, fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora y 229, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, de aplicación supletoria a los juicios mercantiles, establecen el imperativo de que en la demanda se expresen con claridad y precisión los hechos en que se sustente la acción que se ejercite, también lo es que tal obligación se cumple cuando el actor hace remisión expresa y detallada a situaciones, datos o hechos contenidos en los documentos exhibidos junto con la demanda, aun cuando éstos constituyan base de la acción, pues con esa remisión, aunada al traslado que se le corre con la copia de ellos, la parte demandada tendrá conocimiento de esos hechos para así preparar su defensa y aportar las pruebas adecuadas para desvirtuarlos.”

En la especie, del escrito de demanda se advierte que, en el capítulo de prestaciones de la demanda, como ya se dijo, reclamó el pago **interés bancario que se genere, desde la fecha en que no se le ha realizado el pago, hasta que concluya el juicio, de acuerdo con la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIE).**

Empero, en ninguno de los hechos de la demanda menciona alguno en el que señale aquéllos en los que sustenta el reclamo de esa prestación, ya que únicamente menciona en el capítulo de prestaciones que hace esa reclamación, sin explicar de manera alguna las razones de su procedencia.

En esas condiciones, las manifestaciones que realizó la actora en el capítulo de prestaciones de la demanda, son insuficientes para considerar que se cumplió con la obligación que establece el artículo 1390 bis 11 del Código de Comercio, al no narrarse de manera sucinta, con claridad y precisión los hechos en los que se sustentan las prestaciones de referencia.

De esta manera, se advierte que se impidió una adecuada defensa de la parte demandada, al no poder controvertir esas prestaciones, respecto de lo cual debió indicar los hechos en los que se sustenta y, en su caso, demostrar su procedencia.

Con absoluta independencia de lo anterior, debe acotarse que un crédito es un producto financiero otorgado con la condición de que se le pague, en un plazo establecido –no se trata de dinero gratis–. Cuando se adquiere un crédito, no existe desembolso de dinero, ya que éste pertenece a la institución que autorice el crédito, y debe ser devuelto por el cliente, al llegar la fecha de pago.

Por tanto, **se absuelve** a la parte demandada del pago de los **intereses** que reclamó la parte actora.



7. Gastos y costas. Finalmente, con relación al pago de gastos y costas que la parte actora reclama en esta instancia, el artículo 1084 del Código de Comercio, establece que la condenación en costas se hará, en principio, cuando así lo prevenga la ley y, al efecto, las fracciones I a V, del propio numeral disponen los casos en los que siempre habrá condena en costas; cuyo análisis relacionado con la actuación de la parte demandada, evidencia que no se encuentra en ninguno de tales supuestos ni las constancias de autos evidencian que haya procedido con temeridad o mala fe, en tanto que, no realizó actuaciones con el propósito de entorpecer el procedimiento.

“Artículo 1084. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando a juicio del juez se haya procedido con temeridad o mala fe.

Siempre serán condenados:

I. El que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción, si se funda en hechos disputados;

II. El que presentase instrumentos o documentos falsos, o testigos falsos o sobornados;

III. El que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable. En este caso la condenación se hará en la primera instancia, observándose en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente;

IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutive, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación comprenderá las costas de ambas instancias, y

V. El que intente acciones o haga valer cualquier tipo de defensas o excepciones improcedentes o interponga recursos o incidentes de este tipo a quien no solamente se le condenará respecto de estas acciones, defensas, excepciones, recursos o incidentes improcedentes, sino de las excepciones procesales que sean inoperantes.”

En tales consideraciones, **no procede hacer especial condena en costas**, por lo que cada una de las partes deberá soportar las que hubiera erogado en esta instancia.

Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 10/2013, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII,

Marzo de 2013, Tomo 1, Décima Época, Materia Civil, página 575, **registro 2003008**, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

“COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. TEMERIDAD O MALA FE PARA SU CONDENA, CONFORME AL ARTÍCULO 1084, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO. El artículo 1084, prevé que la condena en costas se hará en dos supuestos: cuando así lo prevenga la ley, o cuando estime el juzgador que se haya procedido con temeridad o mala fe. En el primer caso se hace una remisión a la ley, ya sea del propio Código de Comercio, entre otras a las diversas fracciones de su artículo 1084, o la legislación aplicable al caso en la materia. En el segundo supuesto, se está en presencia de una atribución en la que el juzgador, a su arbitrio, podrá condenar en costas cuando advierta que alguna de las partes procedió con temeridad o mala fe. De lo que se sigue que tales supuestos, si bien pueden coincidir, son independientes entre sí, pues no significa que deben actualizarse ambas hipótesis para efecto de la condena en costas, sino que basta que se dé alguno de los supuestos previstos en ley; o bien, que a criterio del juzgador se haya actuado con temeridad o mala fe. Lo anterior, en virtud de que, del numeral citado se desprende que ambos supuestos se encuentran separados por la conjunción disyuntiva "o", lo que indica que basta que en el caso concreto se configure alguno de los dos para que sea procedente la condena respectiva. Así, en términos de la fracción V, del artículo 1084, -que refiere que siempre será condenado el que intente acciones o haga valer cualquier tipo de defensas o excepciones improcedentes o interponga recursos o incidentes de ese tipo, a quien no solamente se le condenará respecto de estas acciones, defensas, excepciones, recursos o incidentes improcedentes, sino de las excepciones procesales que sean inoperantes-, para que proceda la condena en costas, es suficiente con que la autoridad judicial se encuentre impedida para estudiar la controversia planteada por falta de algún presupuesto procesal necesario para ello, sin que sea indispensable que se tome en cuenta la temeridad o la mala fe con que haya actuado cualquiera de las partes.”

Por tanto, como se indicó anteriormente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio, **se absuelve a la demandada Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores**, del pago de **gastos y costas en esta instancia**.

Por lo antes expuesto y fundado, se

RESUELVE:



PRIMERO. Ha procedido la **vía oral mercantil** promovida por [REDACTED], en contra del demandado **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.**

SEGUNDO. La parte **actora** **acreditó** su acción, mientras que la demandada no demostró sus excepciones; en consecuencia, **se condena** a la demandada **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores**, a depositar la cantidad de **\$80,000.00 (ochenta mil pesos moneda nacional)**, por concepto de capital autorizado con motivo contrato de crédito [REDACTED], de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, celebrado entre las partes; en el entendido que dicho depósito bancario o transferencia electrónica, deberá realizarse a la cuenta clabe que el actor proporcione para dicho fin, **siempre y cuando la misma se encuentre a nombre del actor, y sea debidamente corroborada por la parte demandada.**

Lo anterior, en el entendido que subsisten las obligaciones contraídas por ambas partes en el contrato de crédito [REDACTED] así como las que constriñen al actor de acuerdo con el pagaré folio [REDACTED], la autorización del crédito [REDACTED].

Por lo que, el **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores**, deberá respetar las amortizaciones pagadas por el actor a través de los descuentos realizados en sus recibos de nómina.

TERCERO. Se concede a la demandada el plazo de **cinco días hábiles** contado a partir de que esta sentencia sea legalmente ejecutable, para realizar lo anterior, apercibida que

en caso de incumplimiento se decretará ejecución en su contra de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1390 Bis 50, relacionado con el distinto 1346, ambos del Código de Comercio.

CUARTO. Por las razones anotadas en el considerando 6 de esta determinación judicial, se **absuelve** a la parte demandada del pago de intereses moratorios en el presente juicio.

QUINTO. Por las razones anotadas en el considerando 7 de la presente sentencia, **no procede hacer especial condena en costas**, por lo que cada una de las partes soportará las que hubiera erogado en esta instancia.

Las partes quedan notificadas en términos del artículo 1390 bis 22 del Código de Comercio.

Así lo resolvió y firma, **Iván René Castro Flores**, Secretario del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en La Laguna, **encargado del despacho**, conforme a la autorización comunicada mediante oficio **CCJ/ST/7042/2024**, de veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro, emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; ello con motivo de las vacaciones otorgadas al titular, asistido del Secretario **Andrés Garza Valdez**, quien **autoriza y da fe, funcionarios de carrera judicial que ocupan el cargo por concursos de oposición y actúan con total independencia. Doy fe.**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

[REDACTED]

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	ANDRES GARZA VALDEZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	[REDACTED]	Revocacion:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CMDX)	21/01/25 00:08:07 - 20/01/25 18:08:07	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	[REDACTED]			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CMDX)	21/01/25 00:08:07 - 20/01/25 18:08:07			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Numero de serie:	[REDACTED]			
TSP				
Fecha : (UTC/ CMDX)	21/01/25 00:08:08 - 20/01/25 18:08:08			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	[REDACTED]			
Datos estampillados:	[REDACTED]			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	IVÁN RENÉ CASTRO FLORES		Validez:	BIEN Vigente
FIRMA				
No Serie:			Revocacion:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CMDX)	21/01/25 00:35:42 - 20/01/25 18:35:42		Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:				
OCSP				
Fecha: (UTC/ CMDX)	21/01/25 00:35:42 - 20/01/25 18:35:42			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Numero de serie:				
TSP				
Fecha : (UTC/ CMDX)	21/01/25 00:35:43 - 20/01/25 18:35:43			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:				
Datos estampillados:				

Eliminado nombre de terceras personas

- **Fundamentación:** Artículo 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Lineamientos Séptimo fracción III, Trigésimo Octavo fracciones I y II, y Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, artículo 10 de la Ley General de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y artículo 142 primer párrafo, de la Ley del Instituciones de Crédito.

Motivación: Por contener datos que identifican o hacen identificables a las personas.

Eliminados datos del crédito

- **Fundamentación:** Artículo 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Lineamientos Séptimo fracción III, Trigésimo Octavo fracciones I y II, y Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, artículo 10 de la Ley General de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y artículo 142 primer párrafo, de la Ley del Instituciones de Crédito.

Motivación: Por contener información que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.

Eliminada (s) firma (s) electrónica (s)

- **Fundamentación:** Artículo 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Lineamientos Séptimo fracción III, Trigésimo Octavo fracciones I y II, y Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, artículo 10 de la Ley General de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y artículo 142 primer párrafo, de la Ley del Instituciones de Crédito.

Motivación: Por ser un medio de identificación único e intransferible que a través de un archivo digital identifica al titular de la misma.

Eliminada Cuenta bancaria, número de cuenta bancaria y/o Clave Bancaria

- **Fundamentación:** Artículo 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Lineamientos Séptimo fracción III, Trigésimo Octavo fracciones I y II, y Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, artículo 10 de la Ley General de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y artículo 142 primer párrafo, de la Ley del Instituciones de Crédito.

Motivación: Porque la Clave numérica o alfanumérica que identifica a un contrato de dinero en cuenta corriente que vincula a su titular o cliente con su patrimonio y, a través de éste, es posible acceder a la información relacionada con su patrimonio contenida en las bases de datos de las instituciones bancarias y financieras.



Trabajo
Secretaría del Trabajo
y Previsión Social

INSTITUTO
fonacot



Ciudad de México, 10 de octubre de 2025

Secretaria Técnica del Comité de Transparencia

Edgar Dimitri Veites Palavicini Pesquera
Director de lo Contencioso
P r e s e n t e

En la Décima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, celebrada en medios electrónicos el 10 de octubre del 2025, los Miembros del Comité emitieron el siguiente Acuerdo:

CT10SO.10.10.2025-V.9

El Comité de Transparencia del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en los Artículos 40 fracción II; 103 fracción III; 106; 115 y 139 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Lineamientos Séptimo fracción III; Noveno; Trigésimo Octavo fracción I y Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas y el numeral 9.2 de sus Reglas de Integración y Funcionamiento, confirma con 3 votos a favor y ninguno en contra la clasificación de información con carácter confidencial, la versión pública de **9** resoluciones presentadas con la finalidad de dar cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia establecidas en el artículo 65 fracción XXXIV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Ilse Campos Loera
Secretaria Técnica



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Plaza de la República No. 32, Col. Tabacalera, CP. 06030, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

Tel: (55) 5265 7400

www.fonacot.gob.mx/